

Chile en un proceso de cambios sin retorno, pese a la pandemia

Rocío Montes

Periodista, corresponsal de El País en Chile



La posibilidad de cambiar la Constitución de 1980 del régimen de Augusto Pinochet fue la oferta que prácticamente toda la clase política chilena hizo a la ciudadanía en los complicados días de las revueltas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 en el país sudamericano. Fue un ofrecimiento histórico, posible solo porque la democracia en Chile corrió peligro, como lo alcanzaron a advertir los dirigentes tanto de la oposición como de la derecha del presidente Sebastián Piñera (2018-2022). Fue la apuesta de la institucionalidad para descomprimir la mayor tensión social vivida el país desde el regreso a la democracia en 1990, con niveles inéditos de protesta pacífica y, al mismo tiempo, de violencia desatada.

*En medio de las
mayores
revueltas sociales
de las últimas
décadas en Chile,
emergió la
pandemia
paralizando el
movimiento de
golpe*

Hubo represión y violaciones a los derechos humanos, balines, bombas lacrimógenas y mólotov, ciudadanos con ojos mutilados, civiles y policías heridos, enfrentamientos, mobiliario público en el suelo, miles de rayados en los muros con proclamas diversas, grafitis, bailes, monumentos intervenidos, fuego, comercio destruido, estaciones de metros incendiadas –sobre todo en las zonas más populares de Santiago–, y una ciudadanía tomándose por completo del espacio público. Chile fue durante semanas una película intensa compuesta por millones de fotografías que la gente todavía seguramente no procesa del todo. Lo de octubre fue una pintura compleja, no en blanco y negro.

Se estableció un cronograma del proceso constituyente. El 26 de abril de 2020 sería el plebiscito que establecería si se aprobaba el reemplazo de la carta fundamental y, de ganar esa alternativa, la fórmula de redacción (si una convención constitucional formada por un 100% de ciudadanos elegidos –como una asamblea constituyente– o una convención mixta, integrada en partes iguales por ciudadanos elegidos y parlamentarios). Más de 14 millones de personas –entre ellos cerca de 60.000 chilenos que residen en el exterior– estaban convocadas para decidir el futuro del país para las próximas décadas.¹

A fines de febrero, arrancaron las campañas. Chile se lanzaba a la carrera por el referéndum constitucional con actos masivos y recorridos puerta a puerta y los partidos políticos –en un sostenido proceso de decadencia y baja representatividad–, iniciaban una campaña crucial, como la que selló el término de la dictadura en 1988. Pero, como en todo el mundo, Chile entró pronto en un proceso de hibernación: el 3 de marzo se conoció el primer caso confirmado de la COVID-19 en el país y justamente luego de las elecciones municipales en Francia –que tuvo un 53% de abstención por la pandemia–, nuevamente todas las fuerzas políticas se unieron para acordar un cambio de la fecha del plebiscito para el 25 de octubre de 2020, una medida que no tuvo mayores resistencias ni en los grupos políticos ni en la población.²

El movimiento se transformó, de golpe, en una pausa inquietante. Ciertamente el mundo entero, como nunca antes, entró en un estado conjunto de desaceleración. Pero a no todo el mundo la pandemia la sorprendió en medio de las mayores revueltas sociales de las últimas décadas, como a Chile. Con estado de emergencia, toque de queda, suspensión de clases, cierre de comercio y restricciones de movilización, la zona cero de las protestas en Santiago –la plaza Italia o Dignidad, como fue rebautizada por quienes empatizan con la causa–, se convirtió en un lugar fantasma. La protesta se paralizó, aunque a fines de abril algunos grupos aislados comenzaban nuevamente a

¹ https://elpais.com/internacional/2020/02/25/america/1582644388_271227.html

² <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/03/24/980932/Congreso-aprueba-cambio-fecha-Plebiscito.html>

organizarse para marcar su presencia en un lugar simbólico que el Gobierno –con la ausencia de gente por las cuarentenas– aprovechó de remozar. Volvieron los semáforos destrozados, por meses inexistentes.³ Para el inicio de la pandemia, unos siete de cada 10 chilenos apoyaban la posibilidad de una nueva Carta Fundamental, según la encuesta de Activa Research.⁴

En marzo, en Chile había un ambiente polarizado que se advertía en el debate público y en los espacios privados. Aunque la opción *apruebo* parecía ganar con amplia ventaja al *rechazo*, una de las principales incógnitas era el nivel de participación que se alcanzaría en el proceso.⁵ Considerando que el nivel de participación en las presidenciales de 2018 donde ganó Piñera fue menor al 50%, ¿qué legitimidad tendría un referéndum que no convocara ni siquiera a la mitad de los ciudadanos habilitados? No resultaba del todo claro que los que protestaban en las calles –ni pacíficamente ni con violencia– acudieran a votar el día del plebiscito, por histórico que fuese la opción del cambio. Sobre todo, porque las revueltas fueron protagonizadas por un grupo especialmente alejado de la política institucional y de la democracia representativa: los jóvenes.

Revienta la ‘olla a presión’

Las revueltas en Chile explotaron el 18 de octubre de 2019 con cientos de escolares pasando los torniquetes del metro de Santiago sin pagar, en protesta por el alza del precio del billete. Pero fue apenas la punta del iceberg de una olla a presión del malestar ciudadano que se acumulaba por décadas en Chile, un país que aparentemente era el oasis en una América Latina convulsionada, como había señalado Piñera solo algunas semanas antes. Los chilenos estaban descontentos –resultó evidente–, pero ni políticos ni intelectuales han llegado a una conclusión acabada y única acerca de las razones. Es, sin duda, un problema de combina diferentes elementos. Para algunos se trataba de un reclamo general contra las desigualdades desde diferentes frentes y para otros, como para el influyente columnista Carlos Peña, “lo que ocurrió el 18 de octubre fue fruto de múltiples factores; desde cuestiones generacionales, frustraciones del bienestar, una cierta obsolescencia del Estado, luchas culturales”. “Es bastante más complejo que el simplismo de la desigualdad”, ha dicho el académico.⁶

³ <https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-semaforos-vuelven-a-la-zona-cero/RCJVEOZ7QBBBXF5IAHHYFKT7DQ/?outputType=amp>

⁴ <https://www.activasite.com/wp-content/uploads/2020/03/Pulso-Ciudadano-Marzo-Q1.pdf>

⁵ <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-ascanio-cavallo-enemigo-publico-n-2/1017834/>

⁶ https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto?LPKey=21Ayg8zNIPW/u5IVp1R4ISd58hwhuUEVujaV6C8QALo%C3%96

Un 70% de la población gana menos de 640 dólares mensuales y 11,5 millones de personas están endeudadas debido a los bajos salarios

En aquellos días de octubre, por las redes sociales circulaba una imagen que intentaba explicar el problema. Como punta del iceberg aparecían las protestas por el alza de la tarifa del metro. Pero de acuerdo con el dibujo, existía una parte profunda del iceberg que no se alcanzaba a observar: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, “Pacogate” y “Milicogate” [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”.⁷ En definitiva, que lo que ocurría tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores habían logrado apaciguar.

La economía estaba creciendo en octubre en torno a un 2,5%, menos de lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los países vecinos. Pero vivir en Chile se había vuelto especialmente caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 640 dólares mensualmente y 11,5 millones de personas están endeudadas y 4,7 millones son morosas, debido a los bajos salarios, según cálculos de la Fundación Sol.

Poco antes de la insurrección se había anunciado que el recibo de la luz aumentaría hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificado por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumentaba era el precio del billete del metro en horario punta, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar dos horas en llegar a sus lugares de trabajo. Lo mismo que la revelación de hacía algunos meses sobre las contribuciones rebajadas del presidente Piñera –una de las principales fortunas del país– en una de sus casas de descanso en el sur. Tampoco contribuyó la impunidad para los casos de financiamiento ilegal de la política que se han destapado en los últimos años, que afectaron a dirigentes y partidos de diferentes sectores. Los conocidos empresarios de derecha Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, por ejemplo, fueron condenados a 33 clases de ética en una universidad, en el marco de la condena por delitos tributarios en el caso Penta, una de las tramas de mayor impacto.

⁷ https://elpais.com/internacional/2019/10/20/america/1571531965_776078.html

Lo que explotó en octubre de 2019 fue un fenómeno que se había incubado por mucho tiempo en Chile y que fue protagonizado por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura y, por lo tanto, no tenían el miedo de sus antepasados. “Nos hemos acostumbrado a la violencia, no tenemos nada que perder”, decía en noviembre el portavoz de la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau. “El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile”,⁸ señalaba el dirigente, cuya organización poco después nuevamente puso contra las cuerdas a la institucionalidad, al intentar un sabotaje contra la prueba de selectividad universitaria.

Los factores de las revueltas sociales

Fueron múltiples los factores que se enumeraron para explicar las revueltas: la relación estrecha entre la elite política y económica que les impidió observar lo que estaba ocurriendo en los sectores medios, una policía afectada por problemas graves de corrupción, el nivel extremo en que en Chile se privatizó la reproducción de la vida cotidiana –con una cantidad de fuentes de incertidumbre– y una clase media que vive mejor que antes, pero que tiene enormes frustraciones y, sobre todo, una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado.

“En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, se reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría. Pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos”, explicaba el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez. “La ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos”.⁹

El ex presidente socialista, Ricardo Lagos (2000-2006) se reconocía “muy preocupado” por lo que sucedía: “Ni el tránsito de la dictadura de Pinochet a la democracia tuvo estos niveles de destrucción”, decía en los días álgidos de la protesta. Pero señalaba que había “razón para salir a las calles”. “En Chile teníamos un 40% de pobres y ha bajado a

⁸ https://elpais.com/internacional/2019/11/23/actualidad/1574543096_923129.html

⁹ https://elpais.com/internacional/2019/10/20/america/1571531965_776078.html

La ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar

un 10% en las últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales”.¹⁰

Había una razón adicional que explicaba el descontento, menos evidente que las anteriores, pero latente en todos los rincones: el maltrato clasista, una dimensión de la desigualdad que se aborda menos que la económica, que en Chile actualmente se tolera menos que en el pasado. Cuatro de cada 10 chilenos experimentaron discriminación o menoscabo en dignidad en el último año, según una investigación *Desiguales* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),¹¹ por razones como la clase social, el lugar en que se vive, la vestimenta o el trabajo y la ocupación. Los lugares donde se experimentan los malos tratos en mayor medida, de acuerdo al estudio, son los sitios de trabajo, la calle, los servicios de salud, el transporte público, las oficinas del servicio público y en el comercio. Las personas percibidas como autoras de los malos tratos son desconocidos, funcionarios, jefes, empleados de empresas privadas, vecinos y compañeros de trabajo o de estudios, se acuerdo a la investigación.

En febrero de 2019, por ejemplo, ocho meses antes de la insurrección, un conocido empresario chileno protagonizó una escena que fue viralizada en las redes sociales en pleno verano. Aunque las playas son públicas, el hombre echó a un grupo de mujeres que tomaban sol a orillas del lago Ranco, a metros de su vivienda de descanso: “Es mi jardín (...) Se van a ir y si no, voy a venir a sacarlas yo de manera no tan pacífica”, les amenazó, según se observa en un vídeo que todavía está colgado en Youtube, con miles de visualizaciones.¹² El caso causó tanta indignación que grupos de vecinos hicieron llamamientos a ocupar la playa del ejecutivo. Un hombre mayor llegó con su nieta y con una bandera chilena en la mano: “Estoy aquí por el futuro de la niña. Cuando sea mayor, espero que tenga derecho a disfrutar también de este lugar junto a su familia”, señalaba el abuelo. Para muchos –como lo ha dicho el popular astrónomo José Maza–, fue la gota que hizo rebalsar el vaso de la indignación.

¹⁰ https://elpais.com/internacional/2019/10/25/actualidad/1572026903_812256.html

¹¹ https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=dyeMmGRdpBw>

Las protestas masivas que ocurrieron en Santiago y en todo Chile eran una especie de carnaval de proclamas y las más disímiles demandas sociales. Como la del viernes 25 de octubre de 2019, cuando 1,2 millones de personas salieron pacíficamente a las calles de la capital, una ciudad habitada por siete millones. “Viernes con V de venceremos”, “Chile despertó”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, “No estamos en guerra” –en referencias a las palabras del presidente de que Chile estaba en guerra–, “No más conformismo, Chile no es el mismo”, “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”, “Somos la voz de los que ya no pueden gritar”, “Milico ven para abrazarte”. Las encuestas poco a poco comenzaron a instalar las pensiones, la salud, la educación y los sueldos como asuntos prioritarios, mientras otros problemas –como la delincuencia– descendieron entre las preocupaciones de la gente.

Una Carta Magna que no une a los chilenos

Lo que sucede en Chile se trata de un problema profundo y complejo donde, por supuesto, no existen consensos absolutos sobre algunas materias esenciales. Para quienes están por rechazar el cambio a la Constitución de Pinochet, por ejemplo, la Carta Fundamental no impide realizar las transformaciones que clamaban los chilenos, que se pueden efectuar a través de determinadas políticas públicas, según defienden. Una preocupación que con el tiempo se fue haciendo transversal, en tanto, tenía relación a las altas expectativas que se estaban generando en torno al proceso constituyente en la sociedad chilena. Lo cierto, sin embargo, fue que la ciudadanía lentamente comenzó a comprender la importancia de que, por primera vez en su historia, Chile tenía la posibilidad de una Carta Fundamental discutida en democracia. En diciembre de 2019, sin prácticamente campaña, cerca de dos millones de personas participaron de una consulta ciudadana no vinculante organizada por algunos alcaldes, donde un 80% de los votantes estuvieron a favor de una nueva Constitución.¹³

El cambio de la Carta Magna comenzó a tomar fuerza en la sociedad chilena desde las protestas estudiantiles de 2011, en el primer Gobierno de Piñera (2010-2014). Fue cuando quedó en evidencia las dificultades para cambiar ciertas leyes por los altos quórum requeridos, como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). “Muchos de los derechos sociales que se han discutido en la esfera pública en los últimos años –el aborto, la salud, la titularidad sindical,

¹³ <https://www.latercera.com/nacional/noticia/consulta-ciudadana-resultados-preliminares-revelan-846-110-personas-estan-favor-una-nueva-constitucion/940360/>

En medio de las revueltas sociales, el cambio de la Constitución adquirió una gran importancia

los derechos de agua- se topan con la Constitución”, explicaba Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

El profesor Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y catedrático de la Universidad de Utrecht, ponía un ejemplo: “La Constitución de 1980 establece asuntos que serían considerados exagerados en otros países, como que la seguridad social debe ser prestada por instituciones públicas o privadas, con lo que se les da un estatus constitucional a las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”. “Si una ley terminara con ese sistema [de capitalización individual vigente desde 1981, pionero en el mundo] y permitiera uno similar al de Inglaterra, Alemania o España, alguien podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC)”. Para el académico, el TC chileno actúa como una tercera cámara y ha posibilitado por 30 años la capacidad de veto de la derecha: “Es de los de mayor poder del planeta”, explicaba Couso.¹⁴

En los días de crisis marcados por la masiva protesta pacífica y por la actuación de grupos de violentos con alta capacidad destructiva, el presidente Piñera tomó la decisión de abrirse al mayor cambio político de las últimas décadas. Un punto esencial para entender las complejidades del proceso chileno: aunque quienes están en contra de cambiar la Carta Magna se ubican en la derecha doctrinaria –parte del oficialismo–, no toda la derecha ni todo el Gobierno está en desacuerdo con su reemplazo, aunque el mandatario pidió en su momento prescindencia pública en el proceso.

Lo que hasta hace algunos años se trataba de una discusión académica y de la elite política se ha transformado con el tiempo en una demanda social. En medio de las revueltas sociales, diversas encuestas mostraron la importancia que había adquirido el cambio de la Constitución. El estudio del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc), el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) mostró que ocho de cada 10 chilenos estaba a favor de una nueva carta fundamental. La edición impresa de la Constitución de 1980, por otra parte, a fines del año pasado se instaló entre los libros más vendidos en el país en estas últimas semanas. Los ejemplares estaban en el comercio de todo el centro de Santiago y se lo llevaban como pan caliente, según describían los vendedores.

Para Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, la carta magna de Pinochet “fue el fraude más grande de la historia que se haya cometido en Chile: un proceso

¹⁴ https://elpais.com/internacional/2019/11/11/america/1573486255_845701.html

convocado por Pinochet con un mes de anticipación en septiembre de 1980, donde no había padrón electoral y no se permitió a la oposición dar su visión”.¹⁵ Pero no se trata solo de un problema de legitimidad de origen, porque existen distintas constituciones en el mundo cuyos orígenes no han sido democráticos –como la de Japón o de EE.UU.– que han ganado legitimidad sobre la marcha. En el caso de Chile, sin embargo, se trata de una Constitución que divide y no une, en lo que coinciden diferentes sectores políticos, incluso de la derecha liberal.

La de 1980 fue una carta fundamental que comenzó a regir solo cuando se inició el primer gobierno democrático del democristiano Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990. Un día antes del cambio de régimen, la dictadura decretó una decena de leyes orgánicas constitucionales que requerirían de quórum de tres quintos o dos tercios, cuando la mayoría de las iniciativas legales requieren de cuatro séptimos. Fueron las llamadas leyes de amarre. El centroizquierda quedó con las manos atadas y liderando una transición compleja: con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército hasta 1998 y con las figuras de los senadores designados como indicaba la Constitución, que no les permitía ejercer su mayoría política. Fue en 2005, en el Gobierno de Lagos, cuando se eliminaron algunos de los enclaves autoritarios de la Carta Fundamental, como la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o los propios senadores designados. En el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) unas 200.000 personas participaron en discusiones para una nueva Constitución que fueron recogidas por un proyecto presentado al Congreso pocos días antes del cambio de Gobierno, en marzo de 2018.

En este proceso estaba Chile, entonces, cuando lo comenzó a acotar la COVID-19, el 3 de marzo pasado. Chile, el país que fundó el primer sistema nacional de salud de América Latina, en los años cincuenta y que, sin embargo, un cuarto de siglo después la dictadura lo desmontó, desconcentrándolo en 27 servicios independientes. En 1981, el régimen militar abrió paso a las instituciones de salud previsional, las “isapres”,¹⁶ que relevan al Estado de funciones y que operan bajo preceptos de libre competencia, a la que pertenece actualmente cerca del 15% de la población. El tejido sanitario nacional sufrió un golpe severo con el traspaso de los centros de atención primaria a los municipios, aunque siguen dependiendo de los aportes del Estado. Las brechas entre el sistema público y privado son gigantes: el sistema público, por ejemplo, tiene dos camas por cada 1.000 habitantes y en el privado casi se dobla la cifra.¹⁷

¹⁵ https://elpais.com/internacional/2019/11/11/america/1573486255_845701.html

¹⁶ Isapres son entidades privadas que funcionan en base a un esquema de seguros, las cuales están facultadas para recibir y administrar la cotización obligatoria de salud (7% de su remuneración imponible) de los trabajadores y personas, que libre e individualmente optaron por ellas en lugar del sistema de salud estatal (FONASA).

¹⁷ <https://elpais.com/sociedad/2020-04-12/chile-controla-los-respiradores-del-sector-publico-y-privado.html>

La crisis del coronavirus y el estado de excepción

Con la crisis del coronavirus, el Gobierno de Piñera decretó el estado de excepción y toque de queda para todo el territorio, lo que devolvió a los militares a la calle, como en los meses álgidos de las revueltas. A diferencia de lo que ocurrió en medio de la insurrección, sin embargo, la gente no desafió a las autoridades con las medidas de restricción. El Ejecutivo desplegó una estrategia sanitaria basada fundamentalmente en dos elementos: muchos exámenes –lideró la cantidad de test a nivel latinoamericano– y cuarentenas focalizadas en municipios y ciudades, no a nivel regional ni nacional.

La pandemia encontró a Chile con la confianza de los ciudadanos hacia sus líderes por el suelo. De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer en enero, apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición de izquierda y centroizquierda.¹⁸ Fue lo que explicó, de alguna forma, que cuando las autoridades del Ejecutivo comenzaron a hablar de la COVID-19 a comienzos de año, alguna parte de la ciudadanía sospechara que se trataba de una operación para aplacar el movimiento social y detener el proceso de cambios. Lo mismo cuando las autoridades empezaron a tomar las primeras medidas para retomar la producción y la llamó “nueva normalidad”, una palabra que tiene un significado político complejo en Chile. Las revueltas sociales que estallaron el 18 de octubre fueron, en buena parte, una protesta contra la supuesta normalidad del país donde estaban permitidos los precios abusivos de los medicamentos, las colusiones empresariales, la segregación de ricos y pobres en las ciudades o el maltrato clasista.

“Venimos de un estallido social donde la confianza se fracturó totalmente y se quería botar al Estado y al Gobierno. Después de eso, nos encontramos ahora [en medio de la pandemia] con que se clama al Estado por certezas, respuestas y para que se haga cargo de todo”, analizaba en abril, Jaime Mañalich, el ministro de Salud de Piñera.¹⁹

En Chile, como en todo el mundo, la COVID-19 ha hecho reajustar las prioridades de la agenda política, por las inevitables y profundas consecuencias que traerá la crisis económica. El país de antes del estallido de octubre –con su 2,5% de crecimiento proyectado para 2019, que finalmente terminó en un 1%– no tendrá la misma fortaleza que en 2020 para hacer frente a las múltiples demandas sociales. El Ejecutivo de Piñera implementó al comienzo de la pandemia dos pla-

¹⁸ https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200116/20200116081636/encuestacep_diciembre2019.pdf

¹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=j14jISZozZg>

La COVID-19 ha hecho reajustar las prioridades de la agenda política, por las inevitables y profundas consecuencias que traerá la crisis económica

nes económicos por unos 17.105 millones de dólares, equivalentes al 6,9% del PIB, para amortiguar el batacazo económico por la COVID-19. “Aquí habrá quiebre y desempleo, eso tengámoslo claro”, reconoció el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

La economía se pondrá por delante de cualquier otro problema. La persona, líder, grupo o partido que tendrá liderazgo en el cambio político deberá probablemente, primero, demostrar que tiene visión, carisma y olfato histórico frente a la crisis económica. Serán los pobres y las clases medias vulnerables –los nuevos profesionales endeudados que podrían volver fácilmente a la pobreza–, los mayormente afectados por la recesión. Pero justamente por la profundidad y complejidad de la crisis social que estalló en Chile en octubre de 2019, sería imposible que las autoridades apostaran por cambiar el rumbo y no dar respuesta a demandas ciudadanas que justamente tienen relación a los derechos básicos, como la salud, que deben garantizarse para todos en una nueva Constitución que una a los chilenos. Se podría discutir la gradualidad de las reformas, por cierto, pero no la orientación: el camino de cambios que emprendió Chile difícilmente tiene vuelta atrás. Sería un error político para quien sea volver a una normalidad anterior a las revueltas, porque finalmente, como sucede desde 2006 en adelante –con administraciones de distinto signo político–, siempre en Chile el malestar termina reventando y con cada vez mayor fuerza.

La pandemia y sus complejidades representó un respiro impensado para Piñera, un presidente que batió récord de impopularidad en medio de las revueltas (llegó a tener un 9% de aprobación de acuerdo a la encuesta CADEM, que fue subiendo en medio de la crisis sanitaria).²⁰ Pero no solo la gestión gubernamental tendrá una prueba con la COVID-19, sino toda la clase política, que en Chile está en deuda de derecha a izquierda. Entre sus deberes está cambiar el tono del debate, evitar la polarización y, sobre todo, aunque se deban frenar probablemente las altas expectativas de la gente, cumplir con la agenda de cambios políticos fundamentales que exige –y seguirá exigiendo, probablemente– la ciudadanía.

²⁰ https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2020/04/Track-PP-328-Abril-S4-VF_Baja.pdf